



“LOS RETOS DE LA DEMOCRACIA Y LA EQUIDAD SOCIAL”

Dr. Oscar Alfredo Santamaría

31

En palabras del Dr. Richard Jolly: “El mundo se precipita de bruces hacia una integración cada vez mayor conducida principalmente por una filosofía de rentabilidad de mercado y eficiencia económica. Debemos añadir el desarrollo humano y la protección social a la ecuación. La cuestión es poner los intereses del hombre en el centro del debate de la globalización, de acabar con la polarización entre los conectados y los desconectados, de concentrarse en la interdependencia de las personas y no sólo en los flujos monetarios, hacer que la globalización trabaje para las personas y no sólo para los beneficios. En definitiva: Lograr que la globalización se revista de un rostro humano”.

En el mundo actual se pueden identificar cambios drásticos y profundos acaecidos con el proceso de globalización en diversos ámbitos del quehacer humano, con especial énfasis en las áreas de la ciencia y de la tecnología, la cultura, el orden geográfico, el político y la estructura de gobierno. Los ajustes y la apertura de nuestros países forman parte de ese proceso de transformación social, económica, financiera, política, cultural y comunicacional a escala internacional, que se ha dado en llamar globalización.

El final de la década de los ochentas y gran parte de la década de los noventas han sido escenarios de los períodos más prolongados de crecimiento sostenido de la economía inter-

nacional desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial, siendo una etapa de auge y transformación para el mundo industrializado.

Sin Embargo, para el Tercer Mundo, y en particular para América Latina, este período se ha dado en llamar la década perdida por el efecto combinado de los bajos índices en los precios de los productos básicos de exportación, el ritmo de crecimiento insuficiente, las nuevas tendencias del comercio regional, la “revolución de las expectativas” que originaron evasiones hacia los paraísos financieros, la pérdida de control de las comunicaciones y de la cultura, la difusión de nuevas tecnologías, la crisis del Estado “por dentro”, una fuerte crisis ideológica de las ideas estatistas en todas sus concepciones e inadecuadas políticas internas adoptadas; lo que ha determinado un incremento en la brecha entre los países industrializados con economías de vanguardia y las naciones en desarrollo. En este orden, los países en desarrollo tienen escasas posibilidades de acceder a los frutos del proceso de globalización si no se realizan cambios internos y externos de los mismos.

LA DEMOCRACIA

Los grandes valores universales se han establecido en torno de la justicia social, la libertad, la democracia y el respeto del patrimonio humano. La libertad, es solidaridad, es el respeto del patrimonio humano. La democracia es libertad, es solidaridad, es



“Los Retos de la Democracia y la Equidad Social”

una voluntad moral y un sistema económico y social. La democracia es el reforzamiento de la cultura y del arte, es acción y responsabilidad, es justicia y equidad. Luego la democracia es, simplemente, como tantas veces se ha dicho, el gobierno real del pueblo, por y para el pueblo.

En latinoamérica existe la convicción de que la independencia de poderes, su mutuo control, la adecuada representación y participación de mayorías y minorías, la libertad de expresión, asociación y reunión, el pleno acceso a la información, las elecciones libres, periódicas y transparentes de los gobernantes se constituyen en los elementos esenciales de la democracia.

Sin embargo, la democracia política en la práctica no garantiza justicia social ni equidad perfecta, pero ofrece algunos mecanismos de participación que permiten una mayor igualdad entre ciudadanos y obliga a una cierta responsabilidad a los gobernantes respecto de los gobernados por medio del cambio permanente de los dirigentes y el contrapeso entre las distintas fuerzas y organizaciones políticas. Además, es necesario reafirmar que la democracia es un proceso continuo. Cada avance da lugar a nuevos problemas, y a nuevas iniciativas, a nuevas restricciones y nuevas posibilidades.

La cultura política de la democracia supone y requiere actores sociales, prácticas políticas, soluciones institucionales de naturaleza democrática; la tolerancia de las diferencias y las divergencias; así como la aceptación de la legitimidad de los conflictos y la necesidad de procedimientos legales para dirimirlos y obliga a buscar instrumentos y mecanismos de diálogo, negociación y concertación.

El desarrollo de un país, de una sociedad, no es espontánea, sino que es la respuesta a una gran tarea humana, y que en un país en democracia requiere, para su implementación y consolidación, de una plataforma mínima de acuerdo entre la sociedad civil y el gobierno

que genere políticas deliberadas, concentradas, por lo menos en las líneas gruesas de las acciones a seguir, incluyendo las prioridades y los mecanismos e instrumentos a utilizar en dicho proceso.

A partir del proceso de paz salvadoreño, experimento histórico que abre en nuestro país el camino de la esperanza para construir una nueva sociedad en democracia, bajo el imperio del concepto de democracia representativa, se supero todo un pasado de situaciones autoritarias, recobrando las libertades políticas, instaurando una actitud de tolerancia entre los diversos actores políticos, y propiciando con ello la creación de las condiciones para la celebración de sufragios libres, transparentes y competitivos, capaces de otorgar legitimidad a los nuevos gobiernos.

En el caso de El Salvador y de Centroamérica, a partir de la década de los noventa se ha logrado establecer la paz e iniciado una

“El desarrollo de un país, de una sociedad, no es espontánea, sino que es la respuesta a una gran tarea humana, y que en un país en democracia requiere, para su implementación y consolidación, de una plataforma mínima de acuerdo entre la sociedad civil y el Gobierno...”

etapa de convivencia en democracia pero aún queda por alcanzar una democracia de carácter más integral, fundamentada en la construcción de consensos y de esta manera aspirar a la condición de una democracia participativa.

En tal sentido, debe trabajarse buscando apoyo para la consolidación del actual proyecto democrático, a la plena participación y a la edificación de un verdadero Estado de Derecho para alcanzar el bienestar y la justicia social.

Se impone por lo tanto, el lograr una descentralización y desconcentración de la actividad política, económica y administrativa del Estado, paralelamente al fortalecimiento de aquellas otras formas de organización de la sociedad civil, que también juegan un papel

Primer Foro de Reflexión sobre los Desafíos del Nuevo Siglo



importante en todo el proceso de estabilización democrática así como también consolidar las nuevas instituciones democráticas, administrativas y gobiernos locales.

Este desarrollo institucional debe conducir al fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, impulsar la participación organizada y eficaz para la formación, conducción, control y evaluación de las políticas públicas, reformulando las relaciones tradicionales entre instituciones civiles del Estado, fuerzas armadas, organismos de seguridad ciudadana, organizaciones del sector privado y muy especialmente de los medios de comunicación.

Sin embargo, existen todavía obstáculos para la participación ciudadana, como normas o convencionalismos sociales arcaicos, prejuicios, limitaciones burocráticas, sistemas jurídicos y una distribución desigual de los activos que impiden la participación de los sectores marginados. Por lo que resulta imprescindible encarar esa estrategia de complementación de las instituciones democráticas con formas institucionales de participación en los asuntos de Estado y de esta manera, contribuir a perfeccionar las condiciones necesarias para la gobernabilidad.

La experiencia vivida en El Salvador y Centroamérica en cuanto a la solución pacífica de conflictos y construcción de consensos ha traído como resultado un acercamiento gradual hacia el fomento de una cultura de paz y a la participación ciudadana para ir avanzando hacia la consolidación de la democracia y de esta forma adquirir un compromiso real con la libertad, la dignidad, la igualdad del ser humano, la solidaridad, la tolerancia y la equidad social.

Debemos recordar que la democracia no es solamente un conjunto de normas y procedimiento o reglas del juego, que sirven para resolver por vía del consenso y con el respeto y aporte de las minorías los conflictos de intereses, que inevitablemente se dan en toda sociedad.

Estamos convencidos que la democracia es la forma más humana de convivencia y participación, pero esta no sobrevivirá a través de los tiempos si no se transmiten a las sucesivas generaciones los valores que la sustentan, y así alcanzar una convivencia en justicia, orden y paz.

EL ROL DEL ESTADO

Lo que se trata de preservar con la democracia es la paz social, que permite solucionar los conflictos dentro del marco legal; la existencia de gobiernos estables sólidos, transparentes y eficientes, que le den gobernabilidad al sistema.

En este contexto, la globalización y la consolidación del proceso democrático es un gran reto para nuestra sociedad y en la realización del esfuerzo integrador y de participación en dicho proceso es de singular trascendencia el papel que juega el Estado. Durante mucho tiempo, la discusión sobre el Estado estuvo reducida a cuánto éste debía reducirse, diluirse o retirarse, para favorecer y garantizar las tareas que le son apropiadas llevar a cabo, organizaciones multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) impulsaron la prédica pro-mercado y luego de más de dos décadas de este desarrollo sea integral y sostenido en el tiempo se requiere no apenas desarrollar la capacidad de los agentes privados, sino también de un Estado de excelencia, ejemplo de transparencia y probidad, eficiente y eficaz en el uso de los recursos, orientando al servicio del ciudadano, promotor de la igualdad de oportunidades en lo social y manteniendo como premisa que los cambios no tendrían sentido ni razón sino se tuviera en la mente el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes.

Existe conciencia generalizada a nivel mundial, de que la posibilidad de mejorar la gestión del sector privado y por lo tanto su eficiencia, descansa en gran medida en el mejoramiento de la gestión del sector público. El papel del Estado ha cambiado de manera



“Los Retos de la Democracia y la Equidad Social”

sustancial hacia una función reguladora antes que empresaria, no obstante, conserva la responsabilidad de la calidad y cobertura de los servicios públicos, así como la de mantener la cohesión social, de asegurar el bien público y la articulación de intereses de los distintos componentes de la sociedad.

El proyecto modernizador del Estado debe estar al servicio del país democrático solidario, equitativo y abierto al mundo que queremos construir y desde ese punto de vista el Estado tiene claro los roles políticos, económicos y sociales que deben cumplir: articular una visión compartida del país, asegurar un crecimiento económico y sociales, equidad y una calidad de vida digna para todos los habitantes.

La democratización del Estado exige una adecuada combinación de los principios de delegación y participación y el reto fundamental es abrir vías institucionales para que la opinión y el accionar de las distintas comunidades y grupos sociales tengan peso determinante en la gestión de gobierno. En la medida en que se abran canales para que las comunidades y organizaciones que las afectan, el Estado dejará de ser un ente abstracto y lejano y se convertirá en un sólido pilar del régimen democrático.

LA REFORMA DEL ESTADO EN LO SOCIAL

El reto fundamental consiste, por lo tanto, en adecuar el Estado a los requerimientos del presente, y proyectar hacia lo los desafíos del futuro. La reconstrucción de la capacidad de gestión estatal para un desarrollo social activo, equitativo y sostenido debe hacerse mirando hacia adelante.

La democratización del Estado exige una adecuada combinación de los principios de delegación y participación; el reto fundamental es abrir nuevos e innovadores espacios de concertación y participación social en la búsqueda de una mejor calidad de vida para la mayoría de la población.

Un Estado activo en lo social, atento a las incidencias de la globalización el mercado sobre la problemática social, agresivo en materia de desarrollo del capital humano y del capital social a favor de la superación de la pobreza y puesto cabalmente al servicio de la sociedad, se está demostrando como un instrumento histórico clave para las sociedades.

La más importante función del Estado ha sido y será, desde el “Contrato Social” de Rousseau, hasta la Mater et Magistra de Juan XXIII, la de ser el garante del bien común, lo que implica un papel fundamental en el proceso de generación de la riqueza ya no en forma directa, como se entendió hasta hace algunos años, sino a través de la creación de un entorno favorable para el desarrollo de la actividad productiva. Pero además un papel único e insustituible en la provisión de medios, que permitan a todos los miembros de la sociedad incorporarse a la modernidad, y en la de mecanismos que hagan de la distribución del ingreso y del acceso a los servicios fundamentales, un ejercicio efectivo de la solidaridad social.

En el esfuerzo de la reforma del Estado en lo social, se ha planteado el desafío de cruzar los problemas y las características particulares de los sectores sociales estatales con los desarrollos de punta en gerencia de organizaciones a nivel mundial. El desafío es complejo y amplio ya que no se trata apenas comprender los problemas de gestión social apoyándose en las innovaciones sobre comprensión del comportamiento organizacional recientes, respetando las peculiaridades de cada país.

LA EDUCACIÓN

Nadie pone en duda hoy en día, que la educación es vital para el crecimiento económico, el desarrollo social y la democracia. La tesis principal de Michael Novak, es que quien desee liberar a los seres humanos de la pobreza dentro de su nación, debe considerar su recurso fundamental: la mente y el espíritu de la mayoría de sus ciudadanos. La causa del bienestar de las naciones es la habilitación de



Lic. Oscar Santamaría
Exministro de la Presidencia



dichas personas. Un punto crucial es la naturaleza del sistema de economía política en el que los individuos desarrollan sus actividades creativas, por tanto, se deben diseñar instituciones sociales que liberen las virtudes de los ciudadanos. El problema no radica apenas en el acceso a la educación, sino en el acceso a la buena educación.

Las economías actuales se basan en la utilización efectiva del conocimiento y la destreza, y en el Siglo XXI la capacidad del intelecto y la cultura se tornarán temas prioritarios, por lo que el reto consiste en priorizar la inversión en capital humano, como base para lograr mayores niveles de desarrollo y bienestar.

Los cambios que se vienen produciendo han puesto en relieve un nuevo tipo de ciudadanía, que se expresa y basa en una ética de solidaridad y requiere, por consiguiente, una educación, traducido no apenas como más y mejor educación; sino también en más información crítica y en comunicación menos adulterada. Esta nueva educación exige cambio de paradigma: está en crisis el modo clásico de ver la educación y se hace necesario replantear la formación de la identidad del individuo y de las naciones hacia la capacidad para hacer frente a la incertidumbre.

La base material y simbólica de las democracias no se encuentran exclusivamente en un tipo de economía o de institucionalidad política, sino que también en la aplicación más intensiva del conocimiento, la información y la comunicación, por lo que la educación es un componente esencial del orden democrático, comenzando por la misma democracia, que en sí es objeto de aprendizaje, especialmente referente a los estilos de relación. Además, la educación desempeña un importante papel en materia de integración social, solidaridad y movilidad social, y estudios empíricos revelan una estrecha y directa relación entre más y mejor educación con reducción de los niveles de pobreza. En este contexto, la reforma educativa pasa a ser un reto fundamental de las necesidades del Siglo XXI. Si la sociedad del futuro está basada en el conocimiento se hace necesario democratizar el acceso al conocimiento.

LA POBREZA

A pesar de los logros en materia de crecimiento económico en nuestros países, se han registrado modestos avances en la reducción de la pobreza y persisten elevados niveles de desigualdad que han tendido a acentuarse, incluso, en algunos países con altas tasas de crecimiento. Tampoco se ha podido reducir la desocupación ni mejorar la calidad del empleo. Las señales más visibles y dramáticas se observan en el desamparo de la población infantil, en los contingentes de jóvenes sin perspectivas, en las familias desintegradas en la violencia delictiva y en la falta de atención a los grupos más vulnerables.

Diversos analistas del tema afirman que la pobreza de nuestros países obedece a dos causas fundamentales la existencia de estructuras económicas que impiden el progreso y las actitudes de las personas que conforman las sociedades del Tercer Mundo, siendo los síntomas más notorios de estas dos condiciones: el desempleo y la escasez de capital.



“Los Retos de la Democracia y la Equidad Social”

El principal reto en este tema es combatir la falta de equidad, en consecuencia, las políticas económicas deben ser diseñadas en el marco de una política con una visión integral de desarrollo humano y equidad, ya que el desafío de la reducción de la pobreza abarca además de aspectos productivos, aspectos de la igualdad de oportunidades, la distribución del ingreso y la promoción y compensación social.

La erradicación de la pobreza es el gran desafío para el Siglo XXI. Por lo tanto, la pobreza, la marginación y el desempleo, que lamentablemente aún no encuentran solución en nuestras sociedades, constituyen temas prioritarios en la segunda agenda de la gobernabilidad democrática latinoamericana y mundial.

EL DESEMPLEO

Uno de los mayores problemas con que se enfrenta la mayoría de las economías desarrolladas y subdesarrolladas en el mundo es el desempleo. Las causas y soluciones a ese problema han sido de las más estudiadas por los economistas desde la década de los treinta.

El problema del desempleo, según el Premio Nobel Gary Becker, tiene sus principales causas en los fuertes impuestos, cuotas y cargas a las empresas sobre las nóminas con el objetivo, paradójicamente, de crear seguros de desempleo, de accidentes, de vejez o cesantía. Los índices de desempleo están muy relacionados con la dimensión de esas cargas. De acuerdo a Becker, en los países europeos el desempleo es del 11% en promedio, mucho mayor que el desempleo en los Estados Unidos de alrededor de 5.5% justamente porque las cargas sociales sobre los salarios son mayores en los países europeos.

Por otra parte, los factores competitivos más importantes son ahora la calidad, la rapidez y la confiabilidad de la entrega y la capacidad para ampliar la gama de bienes y servicios requeridos por los consumidores de los países industrializados. Es obvio que un modelo empresarial que haga énfasis en estos objetivos, requiere de un entorno social en el cual las situaciones que generan los bajos salarios y el desempleo (pobreza, marginalidad, des-

colarización, etc.), atentan directamente contra la calidad de vida, que parece tener vasos comunicantes con la calidad del producto.

Por otra parte, el escaso alfabetismo, la escolaridad, el desarrollo de la infraestructura y el ahorro interno dificultan la generación de capitales de inversión y de recursos humanos indispensables para un sostenido crecimiento económico y desarrollo social.

Los países de la región centroamericana en general y El Salvador en particular, deben disponer del marco legal e institucional adecuado para seguir avanzando en su proceso de inserción en la globalización y en el proceso de consolidación democrática y en este marco, identificar cuales son las necesidades en cuanto a financiamiento, cooperación, formación de recursos humanos en políticas e instituciones públicas determinantes para el desarrollo sostenido de nuestros países.

Nuestros Estados tienen, en consecuencia, nuevos roles a desempeñar en un momento en el que existen mayores condiciones y mejores oportunidades que en el pasado reciente, para jugar un papel de algún relieve en materia internacional asumiendo mayores responsabilidades. Se hace necesario cooperar y revisar algunas de nuestras viejas tradiciones en beneficio de una nueva e imprescindible gobernabilidad democrática que contemple y eso pese, en un amplio espacio de la continuidad. Es necesario aunar las voluntades de los principales actores sociales para enfrentar de manera más eficaz la superación de la pobreza y la exclusión social; la violencia; la delincuencia; el narcotráfico y la corrupción política y económica; de conjugar la defensa de las libertades con la justicia social; de formular y aplicar políticas económicas en un contexto democrático, pluralista y participativo, así como enfrentar el desafío de la inserción en proceso de globalización, con pie seguro en la sociedad y la economía del conocimiento.

En este marco, es importante la conformación de una plataforma nacional de transformaciones “un proyecto de país” y comprometer el apoyo de la comunidad internacional tanto en la democratización política como en la democratización social.